

## **MEMORIA ECONOMICO JUSTIFICATIVA PARA LA SUPRESIÓN DE LAS TASAS REGULADAS EN LOS CAPÍTULOS LXXX Y LXXXI DE LA LEY DE TASAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

### **I. FINALIDAD**

La presente memoria se realiza de conformidad con lo previsto en la Orden por la que se aprueban las instrucciones para homogeneizar y perfeccionar el contenido de las memorias económico-financieras elaboradas para la fijación o modificación de las cuantías de las tasas y precios de la Comunidad de Madrid, en el marco de las previsiones establecidas en el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto-legislativo 1/2002, de 24 de octubre.

El artículo 12 de la citada Ley, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, establece que toda propuesta por parte de la Consejería competente de establecimiento de una nueva tasa o de modificación de la cuantía de una preexistente, deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos, una Memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta.

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha impulsado medidas de reconocimiento y acreditación de competencias profesionales, como son los certificados de profesionalidad, títulos oficiales obtenidos ya sea a través de la realización de cursos de formación para el empleo como a través de los procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia o de vías de formación no formal, medidas que atienden y responden, además, a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y para el acceso al empleo.

El Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid por el que establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y el Decreto 234/2021, de 10 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, atribuyen a la Dirección General de Formación las competencias en materia de formación para el empleo. Entre ellas, las relativas a la acreditación de las competencias



adquiridas en el ámbito de la formación profesional para el empleo y la gestión del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y la formación no formal, cuya legislación básica se encuentra recogida en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Dadas las actuales dificultades económicas y laborales de la población madrileña, la Dirección General de Formación considera, por ello, necesario la supresión del importe de la tasa por la participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, prevista en el capítulo LXXXI de la Ley de Tasas de la Comunidad de Madrid y por la expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicado prevista en el capítulo LXXX de la Ley de Tasas de la Comunidad de Madrid.

## II. JUSTIFICACIÓN

Esta medida pretende mitigar el fuerte impacto negativo que las personas trabajadoras han padecido en su disponibilidad de recursos con los que poder hacer frente al desarrollo de su proyecto de vida laboral, así como:

- Fomentar las actuaciones de acreditación que redunden en una mejora en la empleabilidad de los trabajadores:

La suspensión, eliminación o supresión de dichas tasas favorecerá la participación de los trabajadores en los procedimientos de evaluación y acreditación de sus competencias profesionales y la solicitud de registro y expedición de certificados de profesionalidad, lo que aumentará sus posibilidades de ocupación laboral y de acceso, mantenimiento y mejora en el puesto de trabajo.

- Mitigar el impacto económico para el ciudadano:

Para la obtención del certificado de profesionalidad, la normativa actual exige el pago de una tasa con independencia de la vía de obtención: tanto por la vía formativa como por la participación en los procedimientos de evaluación y acreditación de la experiencia profesional y la formación no formal.



Ello supone, además, que las personas que participan en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias deben realizar un doble pago: abonar, por un lado, las tasas reguladas en el capítulo LXXXI (artículos 406 a 411 de la Ley de tasas) relativas a su participación en el procedimiento y la tasa de expedición del certificado de profesionalidad regulada en el capítulo LXXX (artículos 401 a 405 de la Ley de tasas).

Los importes que se han de abonar son:

- Por participación en procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias:
  - en la fase de asesoramiento: 24,97€
  - en la fase de evaluación: 12,48€ por UC  
(unidad de competencia)
- Por expedición:
  - de certificado de profesionalidad: 46,82€
  - de Acreditaciones parciales acumulables: 25,00€
  - de cada duplicado, certificado o acreditación: 15,00€

Como ejemplo del coste medio, la obtención del certificado de profesionalidad para la persona que participa en un procedimiento de reconocimiento para la obtención de una cualificación de tres unidades de competencia sería de:

Fase de Asesoramiento:	24,97€
Fase de Evaluación (con 3 UC)	37,44€ (12,48€ x 3 UC)
Expedición Certif-Profesionalidad:	<u>46,82€</u>

**Total.....: 109,23€**

La medida propuesta conllevará un ahorro económico para un número elevado de trabajadores ocupados o desocupados de nuestra región que desean adquirir la acreditación de su experiencia profesional o de la formación no formal que han venido recibiendo a lo largo de su vida, mediante la obtención de un certificado de profesionalidad.

Este ahorro económico al ciudadano, en el caso de los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias no supone una minoración de recursos económicos de la Comunidad de Madrid, ya que son actuaciones que se ejecutan, desde 2018, con créditos del Ministerio de Educación y



Formación Profesional a través del Programa ACREDITA y/o del Plan de formación profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad. Asimismo, hay que tener en cuenta que en la justificación económica de estos fondos es preciso minorar lo aportado en concepto de tasas de los ciudadanos, al ser un concepto no subvencionable.<sup>1</sup>

El importe del presupuesto recibido a través del Ministerio desde 2018, según anualidad y programa, ha sido de:

<b>PROGRAMA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>ACREDITA 2018</b>	<b>462.661,34 €</b>
<b>ACREDITA 2019</b>	<b>274.734,08 €</b>
<b>ACREDITA 2020</b>	<b>411.475,95 €</b>
<b>PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL-PCT EXTRAORDINARIO 2020</b>	<b>17.664.553,77 €</b>
<b>PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (PCT) 2021 (Fondos MRR):</b>	<b>10.987.528,92 €</b>

- Reducir cargas administrativas, tanto para el ciudadano como para la administración.

Desde el punto de vista de la gestión hay que señalar la simplificación administrativa y eliminación de cargas administrativas que supondría esta medida para el ciudadano a la hora de solicitar su certificado de profesionalidad o de participar en el procedimiento de acreditación de las competencias profesionales.

Desde el punto de vista de la administración, conviene tener en cuenta que la eliminación de la tasa permite la agilización en el desarrollo y finalización del procedimiento administrativo, y en la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisión de las personas a las distintas fases del procedimiento

<sup>1</sup> Según establece el art. 65.8 del Reglamento (UE) 1303/2013, en el caso de que las operaciones generen ingresos durante el periodo en el que el MECD subvenciona el gasto (por ejemplo, el cobro de tasas), los ingresos netos deberán deducirse de los gastos subvencionables y declararse en la justificación económica a presentar ante el Organismo Intermedio (INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS OPERACIONES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES. ACREDITA)



de evaluación y acreditación, permitiendo que el personal que realice esta tarea pueda realizar otras relacionadas con el procedimiento o con la comprobación de la superación de los módulos formativos en el caso de expedición de certificados de profesionalidad y acreditación parcial acumulable que se obtienen a través de la superación de acciones de formación para el empleo.

La reducción de cargas administrativas por la eliminación de procedimientos y la simplificación administrativa, unido al beneficio para los ciudadanos permite considerar que la supresión de estas tasas, conseguiría aumentar el número de personas que participan en los procedimientos de evaluación y acreditación profesional y las que pueden obtener el certificado de profesionalidad mejorando, con ello, sus expectativas laborales.

### III. DATOS ECONOMICOS

Los ingresos que la Comunidad de Madrid ha obtenido por el cobro de las tasas señas no han superado, en ninguno de los ejercicios señalados, los 500.000 €.

En el cuadro adjunto se desglosa por anualidad y tipología de tasa:

AÑO	TASAS		TOTAL
	Participación en procedimiento de acreditación de competencias	Expedición de certificados de profesionalidad	
<b>2018</b>	73.738,77 €	301.102,83 €	<b>374.841,60 €</b>
<b>2019</b>	7.061,55 €	478.283,14 €	<b>485.344,69 €</b>
<b>2020</b>	89.616,05 €	142.241,99 €	<b>231.858,04 €</b>
<b>2021 (a 30 sept)</b>	110.146,44 €	201.657,84 €	<b>311.804,28 €</b>

Conforme con los anteriores datos, y haciendo una media de las tres últimas anualidades completas, el importe aproximado que se dejaría de ingresar por el cobro de ambas tasas sería de 364.014,77 euros.



#### **IV. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN NORMATIVA**

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes y considerando que:

- La acreditación de competencias profesionales facilita el acceso a puestos de trabajo cualificados o la permanencia en ellos o la mejora profesional.
- Las tasas suponen barreras económicas o esfuerzos económicos puede conllevar una limitación de acceso al mercado de trabajo.
- La situación del mercado de trabajo actual, como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID- 19, ha incrementado notablemente el número de personas paradas, situándolas en una posición de dificultades económicas. El paro, además, siempre afecta de manera más intensa a la población menos cualificada; su proceso de formación y cualificación es esencial en su reinserción laboral, lo que redundará en beneficio individual y de toda la sociedad.
- El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha decidido reforzar las actuaciones en materia de Formación Profesional, destinando una importante cuantía económica para ello, a distribuir entre las Comunidades Autónomas. La Comunidad de Madrid ha percibido la cantidad de 17.664.554,00 € en 2021 y 10.987.528,92 €, en 2022 para la acreditación de 105.138 unidades de competencia hasta 2022.
- El pago de tasas actúa como factor disuasorio a la hora de que la ciudadanía valore la posibilidad de presentarse a procesos de reconocimiento de sus competencias profesionales o de obtener el correspondiente certificado de profesionalidad o acreditación parcial acumulable al superar las acciones de formación para el empleo.

Se propone la incorporación a la futura Ley de Medidas Fiscales, Administrativas de un artículo que realice la modificación de la Ley de Tasas de la Comunidad de Madrid, suprimiendo los capítulos LXXX y LXXXI de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre.

LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN

